

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

## I

La norma sometida a informe tiene por objeto el establecimiento de los principios, criterios y medidas que configuran el Esquema Nacional de Seguridad, al que se refiere el artículo 43.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, cuando dispone que “el Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información”.

Del mismo modo, mediante el Proyecto ahora informado se da cumplimiento a diversos mandatos contenidos en el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la citada Ley, particularmente en lo referente al cifrado y uso de firma electrónica en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Según se indica en la Exposición de Motivos del Proyecto “el Esquema Nacional de Seguridad persigue fundamentar la confianza en que los sistemas de información prestarán sus servicios y custodiarán la información de acuerdo con sus especificaciones funcionales, sin interrupciones o modificaciones fuera de control, y sin que la información pueda llegar al conocimiento de personas no autorizadas. Se desarrollará y perfeccionará en paralelo a la evolución de

los servicios y a medida que vayan consolidándose los requisitos de los mismos y de las infraestructuras que lo apoyan”, añadiendo, en los mismos términos que se incluyen en el glosario contenido en el Anexo IV que “en este contexto se entiende por seguridad la capacidad de las redes o de los sistemas de información para resistir, con un determinado nivel de confianza, los accidentes, acciones ilícitas o malintencionadas, que comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad, confidencialidad y trazabilidad de los datos almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen, o a través de los que se realiza el acceso”.

La citada Exposición de Motivos aclara que en la elaboración del Esquema Nacional de Seguridad han sido tenidas en cuenta las previsiones contenidas en la normativa de protección de datos de carácter personal, así señala que “La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y sus normas de desarrollo aportan criterios para establecer la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y la información a proteger”.

Finalmente, se recuerda que el Proyecto tiene por objeto “establecer los principios básicos y requisitos mínimos que, de acuerdo con el interés general, naturaleza y complejidad de la materia regulada, permiten una protección adecuada de la información y los servicios, lo que exige incluir el alcance y procedimiento para gestionar la seguridad electrónica de los sistemas que tratan información de las Administraciones Públicas en el ámbito de la Ley 11/2007, de 22 de junio”.

## II

Dicho lo anterior, la interrelación entre la norma sometida ahora a informe y la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal resulta incuestionable, dado que el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999 establece en su apartado 1 que “el responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento, deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural”. Además, el artículo 9.3 de la Ley Orgánica añade que “reglamentariamente se establecerán los requisitos y condiciones que deban reunir los ficheros y las personas que intervengan en el tratamiento de los datos a que se refiere el artículo 7 de esta Ley”.

El mencionado desarrollo se encuentra actualmente contenido en el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, en cuyo Título VIII se establecen las medidas de seguridad que necesariamente deberán contener los sistemas de información en los que se contengan datos de carácter personal.

Ciertamente, el objetivo de la norma ahora sometida a informe no coincide con el descrito en las normas de protección de datos, por cuanto aquél se refiere no sólo a los ficheros que contengan datos de carácter personal, sino a los que incorporen cualquier tipo de información administrativa, con independencia de su contenido real y de la existencia en la misma de tales datos. No obstante, resulta necesario tener en cuenta que la práctica totalidad de las informaciones contenidas en los sistemas de información de las Administraciones Públicas contendrán datos de esa naturaleza.

A tal efecto, debe recordarse que la Ley Orgánica 15/1999 define los datos de carácter personal como “cualquier información relativa a personas físicas identificadas o identificables”, añadiendo el artículo 5.1 f) del Reglamento que dicha información podrá ser “numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo”.

Además, no es preciso que la información aparezca directamente vinculada a la persona a la que aquélla se refiere, sino que será suficiente que aquélla se refiera a personas identificables, definiendo como tales el artículo 5.1 o) del Reglamento “toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, mediante cualquier información referida a su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social. Una persona física no se considerará identificable si dicha identificación requiere plazos o actividades desproporcionados”.

En consecuencia, no cabe duda que en la mayor parte de los supuestos, la información administrativa sometida al esquema nacional de seguridad contendrá datos de carácter personal. En ese caso las previsiones del Esquema Nacional de Seguridad deberán resultar concurrentes y no excluyentes de las medidas previstas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

### III

Ciertamente, no cabe ignorar el ámbito de aplicación más extenso del Esquema Nacional de Seguridad e, incluso, de las medidas que lo integran, dado que el mismo se refiere a todos los sistemas, mientras que el Reglamento únicamente es aplicable al tratamiento de los datos personales; sin embargo existen determinados aspectos del Reglamento que deberán ser especialmente tenidos en cuenta.

1. Así, por ejemplo, existirán determinados ámbitos e incluso áreas de la actividad de las Administraciones Públicas, en que se exigirá, conforme a la normativa de protección de datos y al margen del riesgo que pueda derivarse de un posible fallo en la seguridad del sistema desde el punto de vista de la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad, la implantación de medidas de carácter reforzado en cuanto la información contenida en el sistema incorpore datos de carácter personal.

En este sentido, conviene recordar que los niveles de seguridad fijados por el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 se establecen en su artículo 81 en función de la finalidad del tratamiento y la naturaleza de los datos sometidos al mismo. De este modo, a título de ejemplo, todos los ficheros que contengan datos de carácter personal y sean empleados por la Administración Tributaria en el ejercicio de sus potestades o todos los ficheros relacionados con el ejercicio de la potestad sancionadora deberán, como mínimo, adoptar las medidas de seguridad de nivel medio, con independencia de las que hubieran de implantarse en aplicación del Esquema Nacional de Seguridad.

Por tanto, al margen de las dimensiones de seguridad que resulten de aplicación y de la categorización de la información que haya de realizarse conforme a los criterios previstos en el artículo 43 del Proyecto sometido a informe, los ficheros a los que se está haciendo referencia deberán implantar las medidas de seguridad previstas en la sección Segunda del Capítulo III del Título VIII del Reglamento aún cuando las mismas no fuesen exigibles conforme a los criterios previstos en el Esquema nacional de Seguridad.

En este sentido, debe recordarse que el apartado 7 del citado artículo 81 del reglamento dispone que “Las medidas incluidas en cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes que pudieran resultar de aplicación en cada caso o las que por propia iniciativa adoptase el responsable del fichero”. En consecuencia, no es disponible la aplicación de dichas medidas, sino que la misma viene impuesta

imperativamente por el mencionado Reglamento, en desarrollo de la obligación prevista en el artículo 9 de la Ley Orgánica 15/1999.

2. Al propio tiempo, existen otros supuestos en los que si bien las medidas contenidas en el Anexo II del Proyecto podrían considerarse fundamentalmente concurrentes con las establecidas en el tan mencionado Reglamento, no existe una plena concordancia en los requerimientos técnicos exigibles en uno u otro caso. A título de ejemplo, la medida operacional de registro de actividad de los usuarios, prevista en el apartado 4.3 8 del Anexo II, no coincide plenamente con la de registro de accesos exigible entre las de nivel alto por el artículo 103 del tan citado Reglamento de desarrollo.

En este supuesto, cuando el tratamiento de la información incluyese datos de carácter personal, en el sentido amplio que se ha descrito con anterioridad en el presente informe, será necesario que los requerimientos técnicos descritos en el mencionado artículo 103 se cumplan en su integridad por la Administración Pública responsable del fichero que se encuentre sometida a las medidas de nivel alto exigibles conforme a la normativa de protección de datos de carácter personal, no siendo suficientes las exigencias establecidas al efecto por el Esquema Nacional de Seguridad.

3. Por último, existen determinadas medidas previstas en el Proyecto que podrían equipararse a las previstas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, pero que deberían complementarse con sus previsiones. Así sucedería en relación con las diversas medidas contenidas en el Anexo II que se articularán mediante el diseño de la política de seguridad y que vienen a equipararse con el documento de seguridad regulado por el artículo 88 del citado Reglamento. En el mismo caso se encuentra la auditoría de seguridad, desarrollada con mayor detalle en el Anexo III del Proyecto y que podría completarse con la exigida en los supuestos de medidas de nivel medio y alto por el artículo 96.

En estos casos, sería necesario que se estableciese la posibilidad de que las medidas previstas en ambos instrumentos normativos pudiesen desarrollarse de forma conjunta y coordinada. Así, la auditoría que deberá efectuarse cada dos años conforme al Esquema Nacional de Seguridad podría incluir, cuando ello fuera legalmente exigible, las medidas previstas en el artículo 96 y la política de seguridad incorporar aquellas exigencias previstas para el documento de seguridad en el ya citado artículo 88 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

4. Otra cuestión a tener en cuenta, ya al margen de las concretas medidas de seguridad es la relacionada con el desarrollo de actividades por terceros. En estos casos, cuando esas actividades impliquen el acceso a datos de carácter personal el tercero tendrá la condición de encargado del tratamiento, quedando sometido a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 15/1999 y en el Capítulo III del Título II de su Reglamento de desarrollo.

En particular, en lo referente a las medidas de seguridad, el artículo 9 de la Ley Orgánica, ya transcrito, impone al encargado del tratamiento la adopción de las debidas medidas de seguridad. Además, los artículos 82 y 83 del Reglamento se refieren a la exigibilidad de medidas de seguridad en los supuestos en los que existan prestadores de servicios que, respectivamente, tengan o no tengan acceso a datos de carácter personal.

Igualmente, cuando la prestación de servicios se lleva a cabo en el ámbito de las Administraciones Públicas, debe tenerse en cuenta que la disposición adicional trigésimo primera de la Ley de Contratos del Sector Público ya viene a imponer un régimen específico a la contratación de este tipo de servicios, que deberá complementar el contenido del Anexo V del Proyecto sometido a informe.

5. Igualmente, en lo relativo a las especificaciones técnicas de los productos de seguridad adquiridos, en los términos previstos en el artículo 17 del Proyecto, debe recordarse que en cuanto tales productos sean empleados para el tratamiento de datos de carácter personal, la disposición adicional única del Reglamento dispone que “Los productos de software destinados al tratamiento automatizado de datos personales deberán incluir en su descripción técnica el nivel de seguridad, básico, medio o alto, que permitan alcanzar de acuerdo con lo establecido en el Título VIII de este Reglamento”.

Así, se establece una norma de carácter imperativo a los citados productos, de modo que sin perjuicio de la inclusión de otras especificaciones técnicas, en los términos del citado artículo 17 y del Anexo V del Proyecto, sería necesario que dichos productos contuvieran información acerca de las medidas de seguridad que podrán implantarse en cumplimiento de la normativa específica de protección de datos de carácter personal

6. Por último, no debe olvidarse que el Reglamento de la Ley Orgánica 15/1999 impone también en el Capítulo IV del Título VIII la implantación de medidas de seguridad en relación con los ficheros no automatizados, debiendo entenderse igualmente aplicables estas exigencias a los soportes no

automatizados que, aún derivándose de un fichero automatizado, puedan encontrarse en el ámbito de actividad del responsable del fichero.

Ello implicará que las Administraciones Públicas deberían implantar, respecto a los documentos y ficheros que obrasen en soportes no automatizados, las medidas de seguridad impuestas por el Reglamento, no siendo suficiente, si dichos soportes contienen datos personales, la aplicación de las medidas contenidas en el Esquema Nacional de Seguridad.

En resumidas cuentas, en las Administraciones Públicas responsables de los ficheros en que se contengan datos de carácter personal concurrirá el sometimiento a la normativa ahora informada y a la que es objeto de regulación por las normas de protección de datos de carácter personal, siendo necesario que las Administraciones destinatarias de la norma puedan conocer con claridad el régimen de seguridad que les resulte exigible, teniendo en cuenta la existencia en una y otra norma de distintos criterios para la determinación de los niveles de seguridad exigibles, así como de criterios diversos en lo referente al concreto alcance de las medidas y obligaciones anejas a su adopción.

Por ello será imprescindible dotar a las Administraciones Públicas de un criterio sencillo que les facilite el cumplimiento de la norma y a su vez garantice el respeto al derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal consagrado como tal por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional.

#### IV

Teniendo en cuenta lo que se ha venido exponiendo, la cuestión fundamental que debería resolver el texto sometido a informe será la incluir una previsión que permitiera facilitar a las Administraciones Públicas el conocimiento de las concretas medidas que habrán de aplicarse en caso de que las medidas contenidas en el Esquema nacional de Seguridad concurren junto a las establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, teniendo en cuenta que, si bien ambas tienen el carácter de mínimos exigibles, en todo caso la implantación de unas y otras medidas viene en una caso y vendrá en caso de aprobación del Proyecto ahora informado impuesta imperativamente por el ordenamiento jurídico.

El Proyecto sometido a informe tiene en consideración esta concurrencia a la que se ha hecho referencia. Así, tras indicar, como se ha dicho con anterioridad, que las normas de protección de datos informan y aportan criterios para la determinación de la proporcionalidad de las medidas de

seguridad y la información a proteger en el marco del esquema Nacional de Seguridad, concluye su Exposición de Motivos recordando que “La información tratada en los sistemas electrónicos a los que se refiere este real decreto estará protegida teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Al propio tiempo, el Proyecto se refiere en reiteradas ocasiones a la aplicación de la mencionada Ley Orgánica. Así, el artículo 27.1 c) señala que “para dar cumplimiento a los requisitos mínimos establecidos en el presente real decreto, las Administraciones Públicas aplicarán las medidas de seguridad indicadas en el Anexo II, teniendo en cuenta (...) lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo”.

Del mismo modo, el artículo 43.1 señala, en su párrafo segundo, que “A los datos de carácter personal les será de aplicación su normativa específica y, cuando en los mismos concurre, además, la condición de Información Administrativa, cumplirán, también, las normas que le sean de aplicación relativas al Esquema Nacional de Seguridad. Los cuerpos reguladores que contienen la normativa referida, tendrán la condición de mínimos exigibles, y podrán ser ampliados por causa de la concurrencia indicada o el prudente arbitrio del responsable de la información, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los servicios prestados y la información manejada, y los riesgos a que están expuestos”.

Igualmente, en apartado 4.3 7 del Anexo II se indica que “La gestión de incidentes que afecten a datos de carácter personal tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1720 de 2007, en lo que corresponda”.

Finalmente, en el apartado 5.7.1 del Anexo, aplicable en todo caso, se establece lo siguiente:

*“Cuando el sistema trate datos de carácter personal, se estará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y normas de desarrollo, sin perjuicio de cumplir, además, cuando el grado de exigencia sea superior, las medidas establecidas por este real decreto.*

*Lo indicado en el párrafo anterior también se aplicará, cuando una disposición con rango de ley se remita a las normas sobre datos de carácter personal en la protección de información.”*



## V

Si bien las anteriores previsiones no hacen sino poner de manifiesto la concurrencia, en caso de tratamiento de datos de carácter personal, de las dos normas a las que se viene haciendo referencia, sería conveniente, como se ha dicho que el Proyecto sometido a informe estableciera pautas que pudieran facilitar la actuación de las Administraciones responsables de los ficheros en lo que se refiere a la implantación de los mecanismos de seguridad impuesto por este marco normativo.

Para ello cabría adoptar tres posibles soluciones:

La primera, que garantizaría una mayor seguridad jurídica sería la consistente en detallar las medidas que serían exigibles a partir del cruce de las tres dimensiones fijadas en el Esquema Nacional de Seguridad y los tres niveles establecidos en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999. Sin embargo, ese cruce daría lugar a que en el Anexo debiera detallarse nueve niveles distintos de seguridad resultantes del cruce de ambas normas, lo que haría sumamente farragosa la norma podría, frente al objetivo buscado, dificultar aún más su comprensión.

Igualmente, sería posible la inclusión de previsiones específicas en cada uno de los apartados del Anexo II del Proyecto en que pudiera producirse una concurrencia entre ambas normas. Sin embargo, tal solución adolecería de aún mayores problemas y riesgos que la que se acaba de apuntar.

Frente a tal solución, una tercera opción sería el establecimiento en el Proyecto, probablemente en las disposiciones generales de su Capítulo I, de una norma que se refiriese expresamente a la problemática derivada de la aplicación en un mismo sistema de información de dos cuerpos normativos reguladores de la seguridad del sistema, estableciendo claramente la norma que debería ser aplicable en cada caso.

Para ello, debería tenerse en cuenta lo detallado en el apartado III de este informe en cuanto a la problemática que podría derivarse de la concurrencia de ambas normas. Por este motivo, la norma debería especificar que, además de las medidas previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, las Administraciones Públicas deberán implantar las medidas que correspondan conforme a la normativa de protección de datos, pudiendo ser

conveniente la referencia expresa a la norma actualmente vigente, a fin de evitar la incomprensión de esta previsión.

Además, debería aclararse que en caso de que las medidas sean similares, pero las contenidas en el Reglamento o en el Esquema impongan requisitos adicionales, como sucedía en el supuesto anteriormente analizado en relación con el registro de actividades y el control de accesos, habrán de ser cumplirse los requisitos exigidos por las dos normas.

En particular, deberá recordarse en el precepto al que nos referimos que serán igualmente aplicables las previsiones reguladoras de las medidas de seguridad referidas a tratamientos no automatizados de datos y que el régimen referido al tercero que acceda a datos personales se encuentra sometido a las previsiones de la Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo en relación con el encargado del tratamiento, así como a lo dispuesto en la Ley 30/2007 y la disposición adicional única del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

Por último, podría ser conveniente especificar que, siempre que ello sea posible, las medidas que implican la elaboración de una política de seguridad, conforme al Esquema Nacional de Seguridad, así como las que exigen la auditoría bianual de los sistemas podrán integrarse con las establecidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, relativas respectivamente a la elaboración del documento de seguridad y a la auditoría de seguridad.

A la vista de todo ello, se propone la inclusión de un nuevo artículo 4 en el Proyecto, con el siguiente texto:

**“Artículo 4. Aplicación de las normas reguladoras de las medidas de seguridad en caso de tratamiento de datos de carácter personal.**

**1. Además de las medidas que se establecen en el Anexo II del presente Real Decreto, las Administraciones Públicas deberán implantar, en caso de que se produzca el tratamiento de datos de carácter personal, las del nivel básico, medio o alto, que les sea exigible conforme a lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.**



Los niveles de información y las dimensiones de seguridad establecidas en este Real decreto se entenderán en todo caso como independientes de los que deban adoptarse conforme al mencionado Reglamento.

2. Cuando, conforme a lo señalado en el apartado anterior, las Administraciones Públicas hubieran de implantar medidas cuya regulación en el presente Real Decreto y en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 tuviera una naturaleza similar, pero los requisitos exigidos en ambas normas fueran distintos, las Administraciones Públicas deberán cumplir los exigidos por ambas normas.

Serán también de aplicación, en su caso, las medidas de seguridad aplicables a ficheros y tratamientos no automatizados, reguladas por el Capítulo IV del Título VIII del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.

3. En los supuestos en los que la implantación de las medidas contenidas en este Real Decreto suponga la documentación de la política de seguridad que deberá ser adoptada por las Administraciones Públicas, su cumplimiento podrá integrarse con la elaboración del documento de seguridad al que se refiere el artículo 88 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 cuando dichas Administraciones lleven a cabo el tratamiento de datos de carácter personal.

Igualmente, la auditoría a la que se refieren el Capítulo V y el Anexo III del presente Real decreto podrá ser llevada a cabo conjuntamente con la exigida por el artículo 96 del citado Reglamento.

4. Las medidas resultantes de la aplicación de los apartados anteriores tendrán la condición de mínimos exigibles, y podrán ser ampliados por causa de la concurrencia de la aplicación de ambas normas o el prudente arbitrio del responsable de la información y del fichero o tratamiento, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los servicios prestados y la información manejada, y los riesgos a que están expuestos los datos de carácter personal

5. Las disposiciones contenidas en este Reglamento referidas a la prestación de servicios externos, y en particular lo dispuesto en el



**Anexo V, se entenderán sin perjuicio del necesario cumplimiento de las obligaciones de toda índole que la legislación de protección de datos de carácter personal impone en caso de contratación de servicios de un encargado del tratamiento y de lo establecido, para la contratación de tales servicios, en la disposición adicional trigésimo primera de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.”**

## VI

Debe por último, reiterarse la observación ya formulada por esta Agencia Española de Protección de Datos con ocasión del informe emitido en fecha 31 de marzo de 2009 en relación con el entonces Proyecto de Real decreto por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, proponiendo una modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 en una cuestión que afectaba concretamente a la implantación de medidas de seguridad, y que se reproduce literalmente:

*“Resta, en relación con los registros electrónicos, hacer constar una cuestión que no aparece expresamente recogida en el Proyecto, pero que debería ser tomada especialmente en cuenta, relacionada con el nivel de seguridad exigible a los ficheros relacionados con los mencionados registros.*

*El artículo 81.3 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “además de las medidas de nivel básico y medio, las medidas de nivel alto se aplicarán en los siguientes ficheros o tratamientos de datos de carácter personal (...) los que se refieran a datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual”.*

*Por su parte, conforme al artículo 81.5 b), “en caso de ficheros o tratamientos de datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual bastará la implantación de las medidas de seguridad de nivel básico cuando (...) se trate de ficheros o tratamientos no automatizados en los que de forma incidental o accesoria se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad”.*



*En el régimen existente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 11/2007, los registros telemáticos de las Administraciones Públicas únicamente podían ser utilizados en relación con la tramitación de los procedimientos que determinase el propio departamento u organismo responsable del Registro, por lo que si los modelos normalizados aprobados por aquél contenían datos de los que acaban de enumerarse, por encontrarse, por ejemplo, vinculados con la actividad o competencia del mismo, no cabía en ningún caso considerar el tratamiento de dichos datos como incidental o accesorio en relación con la finalidad del registro.*

*Sin embargo, y como acaba de reproducirse en el apartado anterior de este informe, en el marco derivado del artículo 24 de la Ley 11/2007, los registros electrónicos deberán habilitar la presentación de cualesquiera escritos, comunicaciones o solicitudes dirigidas al propio responsable o a otro órgano u organismo, por lo que la posibilidad de que dichos registros incorpore datos especialmente protegidos no relacionados con la finalidad, competencia o actividad del titular del registro electrónico es ahora bastante probable.*

*La excepción contenida en el artículo 81.5 b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 tenía, entre otros motivo, por objeto, evitar que la decisión arbitraria de quien informase al responsable del fichero acerca de un dato especialmente protegido irrelevante para dicho responsable viciase la seguridad de todo el fichero, exigiendo la implantación de medidas de seguridad de un nivel, en principio, no relacionado en absoluto con la finalidad que justificaba el tratamiento de los datos. A tal efecto, entre otros ejemplos propios del sector privado, fue objeto de análisis durante la tramitación del Reglamento el efecto que la notificación de un escrito de esas características podía producir en el nivel de seguridad de los registros generales de los distintos órganos u organismos de las Administraciones Públicas.*

*La evolución del marco legislativo en esta materia y el desarrollo del principio de acceso electrónico por los ciudadanos a los servicios público impulsa que la medida inicialmente adoptada para el ámbito del tratamiento no automatizado de datos de carácter personal en que incidentalmente fuera incluido un dato especialmente protegido haya en este momento e aplicarse a supuestos tales como los registros electrónicos en los que la voluntad del interesado podría exigir la implantación de medidas de seguridad inicialmente no previstas por no guardar el tratamiento de datos especialmente protegidos relación*



*alguna con la actividad y finalidad propia de la Administración ante la que se presenta la solicitud, escrito o comunicación.*

*Por todo ello, se considera que en este marco normativo la previsión inicial debe igualmente ser predicable de los ficheros automatizados, lo que exigiría modificar el artículo 81.5 b) del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, suprimiendo la expresión “no automatizados”.*

*Por este motivo, se propone la inclusión de una disposición adicional en el Proyecto sometido a informe, en los siguientes términos:*

***“Disposición adicional sexta. Modificación del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999.***

***Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 81 del reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que pasa a tener la siguiente redacción:***

***«Se trate de ficheros o tratamientos en los que de forma incidental o accesorio se contengan aquellos datos sin guardar relación con su finalidad. »”***